

Multiculturalismo y neutralidad de los poderes públicos.

Sumario: 1. Neutralidad y principios constitucionales. 2. Neutralidad de los poderes públicos. 3. Reconocimiento de las organizaciones con fines religiosos. 4. Límites a la discrecionalidad de los poderes públicos.

1. Neutralidad y principios constitucionales.

El multiculturalismo es una consecuencia derivada del pluralismo ideológico, religioso y cultural establecido en las sociedades modernas. Nuestro ordenamiento jurídico consagra el pluralismo como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico¹, y ordena la neutralidad de los poderes públicos. En concreto, el texto constitucional prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), señala que la Administración Pública “sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho” (103.1 CE), y establece que los empleados públicos deben ejercer sus funciones imparcialmente (103.3 CE)². Asimismo, el artículo 14 CE señala que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”; y, respecto de las confesiones religiosas, el artículo 16.3 CE dice que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”³.

¹ De acuerdo con el artículo 1.1. CE: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

² Como ha señalado el Tribunal Supremo: “La característica inherente a la función administrativa es la objetividad, como equivalente a imparcialidad o neutralidad, de tal forma que cualquier actividad ha de desarrollarse en virtud de pautas estereotipadas, no de criterios subjetivos. Ello constituye el reflejo de dos principios acogidos ambos en la Constitución, uno general, el de igualdad de todos, con múltiples manifestaciones de las que el artículo 14 CE es sólo núcleo, sin agotarlas. El otro principio es inherente a la concepción contemporánea de la Administración Pública, y consiste en el «sometimiento pleno a la Ley y al Derecho», principio de legalidad (art. 103 CE)”. Vid. STS de 19 de mayo de 1988, FD 2^a.

³ De forma complementaria, la Ley orgánica de libertad religiosa señala en su artículo 1 que: “Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley”.

Por lo que respecta a la neutralidad religiosa de los poderes públicos que ordena la primera parte del artículo 16.3 CE, el Tribunal Constitucional ha señalado que ésta “veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales”⁴. El Tribunal Constitucional ha señalado que los poderes públicos han de adoptar ante el hecho religioso una actitud de abstención o neutralidad⁵, ya que “el principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso y el principio de igualdad, que es consecuencia del principio de libertad en esta materia, significa que las actitudes religiosas de los sujetos de derecho no pueden justificar diferencias de trato jurídico”⁶.

Para el alto tribunal la neutralidad en materia religiosa implica que “los ciudadanos, en el ejercicio de su derecho de libertad religiosa, cuentan con un derecho a actuar en este campo con plena inmunidad de actuación del Estado, cuya neutralidad en materia religiosa se convierte de este modo en presupuesto para la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática (art. 1.1 CE)”⁷. Asimismo, el deber de neutralidad impide a los poderes públicos identificarse con unas creencias o convicciones concretas, o que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos, e impide cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales⁸. Por último, la neutralidad de los poderes públicos debe ser tanto ideológica como religiosa, ya que ésta es exigible frente a cualquier manifestación de la libertad ideológica y religiosa de los individuos, en relación a los bienes jurídicos garantizados por el artículo 16.1 CE.

Los poderes públicos tienen la obligación de ser neutrales, así como de diseñar un modelo normativo que permita que florezca el pluralismo, ya que el pluralismo es un ingrediente imprescindible para promover el libre desarrollo de la personalidad, que proclama el artículo 10 de nuestro texto constitucional con la fórmula “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

2. Neutralidad de los poderes públicos.

⁴ STC 46/2001 de 15 de febrero, FJ 4.

⁵ STC 46/2001 de 15 de febrero, FJ 7.

⁶ STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1.

⁷ Vid. STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1; STC 177/1996, de 11 de noviembre FJ 9.

⁸ STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1.

El principio de neutralidad de los poderes públicos no se proclama expresamente en el texto del Convenio, pero su contenido esencial está garantizado en el artículo 14, que establece que “el goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”. De forma complementaria, el artículo 1 del Protocolo nº 12 señala que “el goce de los derechos reconocidos por la ley ha de ser asegurado sin discriminación alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”; mientras que el punto 2º del artículo 1 precisa que “nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de una autoridad pública, especialmente por los motivos mencionados en el párrafo 1”.

De acuerdo con este planteamiento, cualquier actuación de los poderes públicos discriminatoria sería contraria al CEDH, salvo que exista una justificación objetiva y razonable; es decir, la actuación se considera discriminatoria excepto cuando persigue un fin legítimo o existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido. Y en todo caso, la carga de la prueba la tienen los Estados.

El TEDH se pronunció sobre esta temática con ocasión del asunto Comunidad religiosa de los Testigos de Jehová y otros contra Austria⁹. El proceso fue iniciado por el grupo religioso Testigos de Jehová ante la ausencia de respuesta del gobierno austriaco a su petición para ser reconocido como organización con fines religiosos.

Las confesiones religiosas podían adquirir personalidad jurídica en Austria de acuerdo con dos normas de 1874 y de 1998, pero las consecuencias jurídicas eran diferentes en función de cada procedimiento. Las confesiones religiosas reconocidas de acuerdo con la norma de 1874 tenían personalidad jurídica pública, mientras que las reconocidas a través del procedimiento previsto en la ley de 1998 obtenían personalidad jurídica privada y se sometían a mayores controles por parte de los poderes públicos. Para disfrutar del estatus que recogía la norma de 1874 se exigía, como condición previa, que la confesión religiosa fuera reconocida y tuviese una antigüedad en Austria de al menos 20 años, y que su número de miembros fuera como mínimo del dos por mil de la población austriaca. Se trataba de requisitos de difícil justificación, y que dificultaban

⁹ Demanda Nº 40825/98. Sentencia de 31 de julio de 2008. El texto completo de la sentencia puede encontrarse en

<https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-88022&filename=001-88022.pdf&TID=thkbhnilzk>

notablemente el reconocimiento de nuevos movimientos religiosos. En el momento del litigio el reconocimiento de personalidad jurídica a las confesiones religiosas se venía realizando, bien mediante Tratado Internacional en el caso de la Iglesia católica, bien mediante una ley especial, como ocurrió con los judíos, islámicos, evangélicos o las Iglesias ortodoxa griega y oriental, bien mediante un decreto expreso de reconocimiento, tal y como ocurrió con seis confesiones religiosas en el periodo 1877-1982. Los Testigos de Jehová denunciaron que la negativa del Gobierno a reconocerles como confesión religiosa en el marco de la ley de 1874 lesionó su derecho a la libertad religiosa y les discriminó por motivos religiosos.

El TEDH estableció que las autoridades públicas austriacas lesionaron el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y discriminaron injustificadamente al grupo religioso, ya que “the imposition of a waiting period before a religious association that has been granted legal personality can obtain a more consolidated status as a public-law body raises delicate questions, as the State has a duty to remain neutral and impartial in exercising its regulatory power in the sphere of religious freedom and in its relations with different religions, denominations and beliefs [...] The Court could accept that such a period might be necessary in exceptional circumstances such as would be in the case of newly established and unknown religious groups. But it hardly appears justified in respect of religious groups with a long-standing existence internationally which are also long established in the country and therefore familiar to the competent authorities, as is the case with the Jehovah’s Witnesses. In respect of such a religious group, the authorities should be able to verify whether it fulfils the requirements of the relevant legislation within a considerably shorter period. Further, the example of another religious community cited by the applicants shows that the Austrian State did not consider the application on an equal basis of such a waiting period to be an essential instrument for pursuing its policy in that field. The Court therefore finds that the difference in treatment was not based on any “objective and reasonable justification”¹⁰.

El TEDH se pronunció de nuevo sobre el principio de neutralidad de los poderes públicos, en relación con el ordenamiento jurídico austriaco, en el asunto Gütl contra Austria¹¹. El señor Gütl solicitó ser reconocido objetor de conciencia al servicio militar, en base a su condición de ministro de culto del grupo religioso

¹⁰ Parágrafos 97-99.

¹¹ Demanda núm. 49686/1999, Sentencia de 12 marzo 2009. El texto completo de la sentencia puede encontrarse en [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22G%C3%9CTL%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-91724%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22G%C3%9CTL%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-91724%22]})

Testigos de Jehová. Las autoridades austriacas aceptaron la solicitud y ordenaron que el señor Gütl realizase un servicio civil sustitutorio. El señor Gütl recurrió la resolución aludida, alegando que la Ley del Servicio Civil eximía únicamente del mismo a los miembros de las sociedades religiosas reconocidas que prestaran servicios relacionados con el culto o la enseñanza religiosa, y que él ejercía un cargo clerical de idéntica naturaleza en su organización religiosa.

El tribunal estimó de nuevo que la regulación austriaca lesionó el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y era discriminatoria, ya que “the refusal of exemption from military and alternative civilian service was likewise based on the ground that the applicant was not a member of a religious society within the meaning of the 1874 Recognition Act. Given its above-mentioned findings in the case of Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others, the Court considers that in the present case the very same criterion – whether or not a person applying for exemption from alternative civilian service is a member of a religious group which is constituted as a religious society – cannot be understood differently and its application must inevitably result in discrimination prohibited by the Convention. In conclusion, section 13a(1) of the Civilian Service Act, which provides for exemptions from the obligation to perform civilian service exclusively in the case of members of a recognised religious society, is discriminatory and the applicant has been discriminated against on the ground of his religion as a result of the application of this provision”¹².

3. Reconocimiento de las organizaciones con fines religiosos.

Las organizaciones con fines religiosos, al igual que ocurre con las organizaciones con fines de otra naturaleza, necesitan adquirir personalidad jurídica y capacidad de obrar para actuar en el tráfico jurídico. Un contexto jurídico neutral debería ordenar un sistema que permita que el proceso de reconocimiento de las organizaciones con fines religiosos sea objetivo.

El TEDH se pronunció sobre esta temática con ocasión del asunto Masaev contra Moldavia¹³. De acuerdo con el ordenamiento jurídico moldavo, estaba prohibida la práctica de aquellas religiones que no fueran reconocidas por el Estado. El señor Masaev fue sancionado por organizar la práctica de una religión no reconocida como tal, en un local privado; en concreto, de acuerdo con el

¹² Parágrafos 39-40.

¹³ Demanda núm. 6303/2005, Sentencia de 12 mayo 2009. El texto de la sentencia está disponible en [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22\ %22CASE%20OF%20MASAEV%20v.%20MOLDOVA\ %22%22\],%22documentcollectionid2%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-92584%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\ %22CASE%20OF%20MASAEV%20v.%20MOLDOVA\ %22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-92584%22]})

Religious Denominations Act, “In order to be able to organise and operate, denominations must be recognised by means of a government decision. Where a denomination fails to comply with the conditions laid down by the first paragraph of section 9 of the present Act, recognition may be withdrawn under the same procedure”. Por este motivo, el señor Masaev inició un largo periplo judicial, que culminó ante el TEDH, denunciando que la regulación moldava permitía un elevado grado de arbitrariedad y discrecionalidad a los poderes públicos, lo cual obstaculizaba el ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

El ordenamiento jurídico moldavo preveía un reconocimiento a priori de los grupos que se declarasen como religiosos, de forma que, una vez que el grupo se definiera como tal, las autoridades públicas decidían si el grupo podía registrarse y actuar en calidad de tal en el tráfico jurídico. En este sentido conviene tener en cuenta que el señor Masaev no fue sancionado por realizar actividades contrarias al orden público o los principios constitucionales, sino por practicar un culto religioso que no había sido reconocido como tal por el Estado.

El TEDH estableció que en este caso concreto se había lesionado el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión del demandante, ya que: “any person manifesting a religion which is not recognised in accordance with the Religious Denominations Act is automatically liable to being punished under the provisions of Article 200 § 3 of the Code of Administrative Offences. The Government contended that since it was not disproportionate for a State to impose compulsory State registration for religious denominations it must also not be disproportionate for the State to impose sanctions against those who manifest religious beliefs which are not formally constituted and registered as religious denominations. The Court does not contest the State’s power to put in place a requirement for the registration of religious denominations in a manner compatible with Articles 9 and 11 of the Convention. However, it does not follow, as the Government appear to argue, that it is compatible with the Convention to sanction the individual members of an unregistered religious denomination for praying or otherwise manifesting their religious beliefs. To admit the contrary would amount to the exclusion of minority religious beliefs which are not formally registered with the State and, consequently, would amount to admitting that a State can dictate what a person must believe. The Court cannot agree with such an approach and considers that the limitation on the right to freedom of religion provided by Article 200 § 3 of the Code of Administrative Offences constituted an interference which did not correspond to a pressing social need and was therefore not necessary in a democratic society. Accordingly, there has been a violation of Article 9 of the Convention”¹⁴.

¹⁴ Parágrafo 26.

De acuerdo con el planteamiento del tribunal, el hecho de que el ordenamiento jurídico moldavo ordenase la existencia de un registro de organizaciones con fines religiosos no era lesivo desde la perspectiva del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La lesión se producía cuando era sancionable el ejercicio de este derecho por su mero ejercicio, ya que eso supone la existencia de un obstáculo injustificado al ejercicio de un derecho fundamental inaceptable en el contexto de una sociedad democrática.

4. Límites a la discrecionalidad de los poderes públicos.

La labor de control de los poderes públicos de los fines de las organizaciones que se autodeclaran como religiosas ha sido debatida por el TEDH. La libertad de pensamiento, conciencia y religión, es un derecho individual, por lo que los individuos son los que deciden qué creencias o convicciones deben estar protegidas por este derecho, siempre que su ejercicio o práctica sea respetuoso con los límites que a este respecto ordena el artículo 9 del CEDH, es decir, “la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás”.

El TEDH se pronunció sobre esta temática en el asunto Iglesia Metropolitana de Besarabia contra la República de Moldavia¹⁵. La Iglesia metropolitana solicitó al Gobierno moldavo su reconocimiento como grupo religioso en diversas ocasiones, pero la Secretaria de Estado de asuntos religiosos rechazó sus solicitudes. Después de diversos procesos judiciales, el Tribunal Supremo moldavo estimó que la negativa del Gobierno a admitir la solicitud de los demandantes no vulneraba su libertad religiosa, ya que los afectados eran cristianos ortodoxos y podían manifestar su creencia en el seno de la Iglesia metropolitana de Moldavia, reconocida por el Estado desde 1993¹⁶. En otras palabras, pese a que la Iglesia Metropolitana era una organización religiosa autónoma e independiente de la Iglesia metropolitana de Moldavia, los poderes públicos estimaron lo contrario, por lo que se negaron a reconocer personalidad jurídica y capacidad de obrar autónoma.

Respecto a la capacidad de los poderes públicos para decir qué creencias o convicciones pueden considerarse religiosas, el tribunal señaló que “the Court further observes that in principle the right to freedom of religion for the purposes of the Convention excludes assessment by the State of the legitimacy of religious beliefs or the ways in which those beliefs are expressed. State measures favouring a particular leader or specific organs of a divided religious community or seeking

¹⁵ Demanda núm. 45701/1999, Sentencia de 13 diciembre 2001. El texto de la sentencia puede encontrarse en <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-59985%22%5D%7D>

¹⁶ Vid Parágrafo 26.

to compel the community or part of it to place itself, against its will, under a single leadership, would also constitute an infringement of the freedom of religion. In democratic societies the State does not need to take measures to ensure that religious communities remain or are brought under a unified leadership. Similarly, where the exercise of the right to freedom of religion or of one of its aspects is subject under domestic law to a system of prior authorisation, involvement in the procedure for granting authorisation of a recognised ecclesiastical authority cannot be reconciled with the requirements of paragraph 2 of Article 9¹⁷.

En este caso concreto, los poderes públicos no solo excluyeron a las legítimas creencias o convicciones de una organización de la definición de religión de forma arbitraria, sino que, además, lo hicieron con el objeto de beneficiar a la Iglesia metropolitana de Moldavia, incumpliendo de esta manera su obligación de ser religiosamente neutrales, salvo en aquellos supuestos en los que las organizaciones religiosas puedan realizar las actividades prohibidas por el artículo 9 del CEDH.

Asimismo, la decisión de los poderes públicos suponía un obstáculo directo para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, ya que la negativa a reconocer al grupo religioso impedía a éste actuar en el tráfico jurídico en calidad de tal. En palabras del tribunal: “only religions recognised by a government decision may be practised in Moldova. In particular, only a recognised denomination has legal personality (section 24), may produce and sell specific liturgical objects (section 35) and engage clergy and employees (section 44). In addition, associations whose aims are wholly or partly religious are subject to the obligations arising from the legislation on religious denominations (section 21). That being so, the Court notes that in the absence of recognition the applicant Church may neither organise itself nor operate. Lacking legal personality, it cannot bring legal proceedings to protect its assets, which are indispensable for worship, while its members cannot meet to carry on religious activities without contravening the legislation on religious denominations. As regards the tolerance allegedly shown by the government towards the applicant Church and its members, the Court cannot regard such tolerance as a substitute for recognition, since recognition alone is capable of conferring rights on those concerned [...] Lastly, it notes that when the authorities recognised other liturgical associations they did not apply the criteria which they used in order to refuse to recognise the applicant Church and that no justification has been put forward by the Government for this difference in treatment¹⁸.”

La obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden el ejercicio colectivo del derecho de libertad religiosa fue debatida por

¹⁷ Vid Parágrafo 117.

¹⁸ Vid Parágrafo 129.

el TEDH en el asunto Iglesia de la Cienciología de Moscú contra Rusia¹⁹. El asunto mencionado ilustra los numerosos conflictos que el grupo religioso referido ha tenido tradicionalmente para actuar en el tráfico jurídico ruso.

La Iglesia de la Cienciología de Moscú estaba inscrita en el registro de entidades religiosas habilitado a tal efecto, y disfrutaba de personalidad jurídica y capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines religiosos. En 1997 se aprobó una ley de libertad de conciencia y de asociaciones religiosas, de acuerdo con la cual las organizaciones con fines religiosos tuvieron que solicitar su reconocimiento ante las autoridades del registro civil. En este contexto, la Iglesia de la Cienciología de Moscú solicitó de nuevo su inscripción en el registro, la cual, después de un largo y complejo proceso, fue denegada, culminando el proceso ordenando la disolución del grupo religioso.

Como punto de partida, el tribunal se pronunció sobre la relación entre el derecho individual a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y el papel que desempeñan las organizaciones con fines religiosos en este terreno, señalando que; “while religious freedom is primarily a matter of individual conscience, it also implies, inter alia, freedom to “manifest [one's] religion” alone and in private or in community with others, in public and within the circle of those whose faith one shares. Since religious communities traditionally exist in the form of organised structures, Article 9 must be interpreted in the light of Article 11 of the Convention, which safeguards associative life against unjustified State interference. Seen in that perspective, the right of believers to freedom of religion, which includes the right to manifest one's religion in community with others, encompasses the expectation that believers will be allowed to associate freely, without arbitrary State intervention. Indeed, the autonomous existence of religious communities is indispensable for pluralism in a democratic society and is thus an issue at the very heart of the protection which Article 9 affords. The State's duty of neutrality and impartiality, as defined in the Court's case-law, is incompatible with any power on the State's part to assess the legitimacy of religious beliefs”²⁰.

El TEDH estimó que la decisión de las autoridades administrativas rusas lesionó el derecho de libertad religiosa de la Iglesia de la Cienciología, pues el grupo religioso había disfrutado de personalidad jurídica y capacidad de obrar en cuanto entidad con fines religiosos durante tres años, sin que los poderes públicos hubieran probado que el grupo o sus miembros incumplieran sus obligaciones legales o atentaran contra el ordenamiento jurídico.

¹⁹ Demanda núm. 18147/2002. Sentencia de 5 de abril de 2007. El texto de la sentencia puede encontrarse en <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22001-80038%22>

²⁰ Vid Parágrafo 72.

La regla general en este tipo de supuestos, de acuerdo con la lógica del tribunal, debe ser el reconocimiento de personalidad jurídica y capacidad de obrar en el tráfico jurídico, y la pérdida de la misma solo puede producirse en casos excepcionales, y en todo caso después de que el Estado pruebe los motivos para retirar la personalidad jurídica a las organizaciones con fines religiosos. En palabras del tribunal, "It follows that the grounds invoked by the domestic authorities for refusing re-registration of the applicant had no lawful basis. A further consideration relevant for the Court's assessment of the proportionality of the interference is that by the time the re-registration requirement was introduced, the applicant had lawfully existed and operated in Moscow as an independent religious community for three years. It has not been submitted that the community as a whole or its individual members had been in breach of any domestic law or regulation governing their associative life and religious activities. In these circumstances, the Court considers that the reasons for refusing re-registration should have been particularly weighty and compelling. In the present case no such reasons have been put forward by the domestic authorities. In view of the Court's finding above that the reasons invoked by the Moscow Justice Department and endorsed by the Moscow courts to deny re-registration of the applicant branch had no legal basis, it can be inferred that, in denying registration to the Church of Scientology of Moscow, the Moscow authorities did not act in good faith and neglected their duty of neutrality and impartiality vis-à-vis the applicant's religious community"²¹.

Un supuesto similar fue debatido por el TEDH, con ocasión del asunto Iglesia de la Cienciología de San Petersburgo contra Rusia²². La Iglesia de la Cienciología de San Petersburgo solicitó en reiteras ocasiones ser reconocida como organización con fines religiosos, de acuerdo con el preceptivo procedimiento. Las autoridades rusas desestimaron en reiteradas ocasiones las peticiones de la Iglesia de la Cienciología, alegando que la solicitud estaba incompleta y que debía entregar información o documentación adicional; una vez subsanada la solicitud, las autoridades rusas respondieron sucesivamente requiriendo nueva información. La ausencia de reconocimiento impidió a la organización actuar con personalidad jurídica autónoma en el tráfico jurídico, obstaculizándose de esta manera el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de sus seguidores.

El TEDH se pronunció desde la perspectiva del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, como del derecho a la asociación, que protege el artículo 11 del Convenio de acuerdo con la siguiente fórmula: "1. Toda persona

²¹ Vid párrafo 96-97.

²² Demanda N^o 47191/06. Sentencia de 2 de octubre de 2014. El texto completo de la sentencia puede encontrarse en [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-146703%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-146703%22]})

tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado”.

En este caso concreto, el tribunal señaló que “the Court notes that the Religions Act does not contain the requirement that the local authority issuing the confirmation document in accordance with section 11(5) should be one and the same entity that has existed without interruption since the religious group filed notice of its establishment under section 7(2). In any event, the applicant group cannot reasonably be expected to bear the consequences of the re-organisation of local authorities and to ensure continuity of their archives. Moreover, the Ministry of Justice’s Methodological Recommendations expressly acknowledged that no particular procedure for issuing confirmation documents was prescribed by law and that evidence of a religious group’s existence should be supplied by the group itself. It follows that this ground was likewise devoid of any legal basis [...] where it has been shown that interference was not in accordance with the law, it is not necessary to investigate whether it also pursued a “legitimate aim” or was “necessary in a democratic society”. Nevertheless, the Court considers it important to reaffirm its position that the lengthy waiting period which a religious organisation has to endure prior to obtaining legal personality cannot be considered “necessary in a democratic society”. In so far as the fifteen-year waiting period under Russia’s Religions Act affected only newly emerging religious groups that did not form part of a hierarchical church structure, there was no justification for such differential treatment. A provision such as this was peculiar to Russian law and there were no other member States of the Organization for Security and Co-operation in Europe that required a religious organisation to prove such a lengthy existence before registration was permitted. The Court has already had occasion to find a violation on account of a similar provision in Austrian law, whilst the Russian Government’s claim that Latvian and Romanian laws imposed waiting periods on base-level religious communities was mistaken”²³.

El tribunal fue muy crítico, además de con las dilaciones indebidas a las que fue sometida la organización religiosa, con el proceso de reconocimiento habilitado por las autoridades rusas, y especialmente con el hecho de que la

²³ Vid párrafos 44-47.

legislación rusa requiriese un periodo de 15 años para reconocer a los denominados nuevos movimientos religiosos, lo cual, en opinión del tribunal, suponía un obstáculo injustificable al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

El TEDH se ha pronunciado recientemente sobre esta temática en el asunto Centro Bíblico de la República de Chuvash contra Rusia²⁴. Una organización con fines religiosos venía organizando actividades relacionadas con la práctica del culto religioso y actuando en el tráfico jurídico con normalidad desde 1990 en Rusia, pero en 1996 abrió una escuela dominical con el objeto de enseñar y educar en sus principios religiosos. La organización religiosa creó la escuela amparada en su personalidad jurídica como entidad religiosa, en el entendimiento de que no necesitaba solicitar una licencia adicional para sus actividades educativas, dado que estas tenían por objeto la transmisión de principios religiosos. Las autoridades rusas inspeccionaron los locales utilizados por el grupo religioso, y sancionaron al grupo con su disolución como persona jurídica, por incumplir la normativa municipal de salud y seguridad.

La organización religiosa denunció estas actuaciones, al interpretar que la actuación de las autoridades rusas fue arbitraria, y la sanción era desproporcionada, especialmente porque, de acuerdo con el artículo 9 del CEDH, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluye la libertad de manifestar la religión o convicciones por medio de la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

El tribunal sentenció a favor del grupo religioso, al estimar que la sanción impuesta por las autoridades rusas fue desproporcionada, toda vez que “the Court is not convinced by the Government’s argument that the dissolution of the applicant, a registered religious organisation, was necessary because the Sunday school or Biblical college were not registered as separate legal entities. As the text of the Prosecutors Act and the federal court’s judgment in an earlier case indicate, it was open to the prosecutor to seek discontinuation of any activity that it considered harmful or unlawful. The prosecutor could have asked for the school and college to be reorganised but he did not make use of that power and immediately filed an action for dissolution. The applicant organisation demonstrated goodwill in seeking to remedy the alleged violation by amending its statute, and also reminded the court of its discretion to issue a special ruling directing the defendant to comply with the legal requirements instead of ordering its dissolution. The courts nevertheless granted the prosecutor’s claim without addressing the latter argument. Nor did the courts explain what other, less intrusive means of achieving the declared aim of the protection of the rights

²⁴ Demanda N^o 33203/08. Sentencia de 12 de junio de 2014. El texto completo de la sentencia puede encontrarse en <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-144677%22%5D%7D>

of students had been considered and why they had been deemed insufficient. Accordingly, the domestic authorities have not shown that the dissolution, which undermined the very substance of the applicant organisation's rights to freedom of religion and association, was the only option for the fulfilment of the aims they pursued"²⁵.

Asimismo, en palabras del tribunal, "the nature and severity of the sanction applied are factors to be taken into account when assessing the proportionality of any interference. Before the decision to dissolve it was made, the applicant organisation of Pentecostals had existed and legally operated in the Chuvash Republic for more than fifteen years, from 1991 to 2007. The decision by the Russian courts to dissolve the applicant organisation had the effect of stripping it of legal personality and prohibiting it from exercising the rights associated with legal-entity status, such as the right to own or rent property, to hold bank accounts, to hire employees and to ensure judicial protection of the community, its members and its assets, which, as the Court has consistently held, are essential for exercising the right to manifest one's religion. Moreover, in addition to the above-mentioned rights normally associated with legal-entity status, the Russian Religions Act reserved a panoply of rights for registered religious organisations and explicitly excluded the possibility of such rights being exercised by either non-registered religious groups or non-religious legal entities. The exclusive rights of religious organisations with legal-entity status included, in particular, such fundamental aspects of religious practice as the right to establish places of worship, the right to hold religious services in places accessible to the public, the right to produce, obtain and distribute religious literature, the right to create educational institutions, and the right to maintain contacts for international exchanges and conferences. It follows that, as a result of the Russian courts' decisions, the Biblical Centre ceased to exist as a registered religious organisation and a group of Pentecostal Christians who were its members were divested of the right to manifest their religion in community with others and to engage in the activities which are indispensable to their religious practice"²⁶.

En resumen, el tribunal estableció que en este supuesto la actuación desproporcionada y discrecional de las autoridades rusas lesionó el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, del grupo religioso. El problema de fondo es que la regulación rusa preveía la disolución de las organizaciones con fines religiosos, con independencia de la gravedad de las actuaciones realizadas por la organización, y de acuerdo con un procedimiento administrativo que no garantizaba adecuadamente los derechos y libertades de los administrados.

²⁵ Parágrafo 59.

²⁶ Parágrafo 60.